



PROMETEO LUCERO ▶ Manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en México tras la toma de protesta de Donald Trump, enero de 2017.

cada dos años. Es decir, los *dreamers*¹ debían reunir un compendio de documentación e interactuar con la burocracia para “producir” los derechos de una ciudadanía parcial mediante una dinámica de fricción entre individuos y autoridades.

En este caso también opera el federalismo, concebido como división de poderes por espacios geográficos. Las autoridades locales y sus alianzas con la sociedad civil fueron particularmente relevantes para la activación de esta semiciudadanía, ya que el gobierno federal no dirigió recursos presupuestarios para la DACA, a diferencia de lo sucedido con el programa de legalización de 1986 (De Graauw y Gleeson, 2016). Esto es así porque no hay un derecho automático relacionado con el estatus de la DACA, sino que los sujetos que cumplen con el perfil deben solicitar su entrada al programa y lidiar con

una burocracia difícil de navegar. En ausencia de recursos federales, varias ciudades y condados locales financiaron a universidades y organizaciones civiles locales para que identificaran a jóvenes indocumentados que cumplieran con los requisitos y les ayudaran a navegar en la burocracia federal para que pudieran comprobar que tenían derecho a obtener la DACA. Els de Graauw y Shannon Gleeson (2016) identifican la importancia del ámbito local para la ciudadanía, y muestran una variación importante en los recursos y capacidades a disposición de los jóvenes según las ciudades donde se encontraban.

1 Esta denominación, que puede traducirse como “soñadores”, proviene de la sigla de *Development, Relief and Education for Alien Minors Act*, conocida como *DREAM Act*.